

Fecha: 25-07-2024
Medio: La Segunda
Supl.: La Segunda
Tipo: Noticia general
Título: "Algunos creyeron fantasiosamente que las energías renovables iban a tener efecto inmediato"

Pág.: 18
Cm2: 677,4

Tiraje: 11.692
Lectoría: 33.709
Favorabilidad: No Definida



El expresidente de Generadoras de Chile dice que "la gran reforma pendiente es la distribución al usuario final, porque ahí sí ha existido una importante modernización de las tecnologías digitales".

Por Paulina Modiano

El 15 de agosto es la fecha que se autoimpuso el Gobierno para enviar un proyecto de ley que triplique la cobertura del subsidio eléctrico ante las alzas tarifarias que comenzaron a regir a inicios de julio. La mesa técnica liderada por el Ministerio de Energía, y que está discutiendo en el Congreso las formas de ampliar (y financiar) el beneficio, ha funcionando en medio de los cuestionamientos de varios parlamentarios. La mayoría de esas críticas apunta a que serían los mismos usuarios los que terminarían financiando la mayor parte del subsidio.

En principio, este incremento en la subvención está pensado hasta 2027 con un financiamiento anual de entre unos 300 a 350 millones de dólares, que según la propuesta gubernamental se obtendría mediante una sobretasa temporal del impuesto verde al carbono; un alza en el cargo por servicio público de los mayores consumidores industriales; y un mayor aporte fiscal por la recaudación extra del IVA vinculada al alza de las tarifas.

Para Claudio Seebach, ingeniero civil industrial posgraduado en Stanford, expresidente de Generadoras de Chile —la asociación gremial que agrupa a las principales empresas de generación de energías renovables y demás tecnologías—, el alza de las tarifas "era una situación inevitable y que en algún momento había que regularizar. Pero también es importante que exista un subsidio para los sectores más vulnerables y para las pymes, porque las afecta harto. Y ahí hay que aumentar el aporte de recursos fiscales, para que esto no lo terminen pagando los propios usuarios".

El actual decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, agrega que "la pregunta que debemos hacernos es cómo salimos adelante, porque de alguna manera tenemos que pasar este lomo de toro de aumento de tarifas temporal, ya que lo más importante en este proceso de transición energética es la existencia de contratos, los cuales se deben respetar teniendo una visión de largo plazo, que implica que existan reglas claras del juego que faciliten el desarrollo de nuevas inversiones en energías renovables".

"Desincentivo para instalar centrales cerca de Santiago"
—¿Qué le parece la fórmula plantea-

da por el Gobierno para financiar el aumento al subsidio, utilizando la mayor recaudación del IVA y la sobretasa temporal del impuesto verde al carbono?

—Si va haber mayores ingresos por IVA es posible que se destine temporalmente al subsidio a las tarifas. Ahora, si se aplica una sobretasa a las emisiones de carbono podría implicar que terminara provocando un aumento en los mismos contratos que se están pagando hoy, que son antiguos y no de energías limpias. Entonces terminaría haciendo una trampa al solitario. Es importante hacer un análisis mucho más riguroso sobre el impacto que podría tener cualquiera de esas medidas.

—¿Y la revisión de los contratos que se adeudan, puede ser una opción como han planteado algunos parlamentarios?

—Esa es un área que no podemos tocar, porque significaría dinamitar la confianza en el país y en las nuevas inversiones en energías renovables, que son indispensables para cumplir nuestras metas climáticas y también de costos, porque actualmente son más baratas. Chile es un país líder a nivel mundial en energía solar y con un gran potencial eólico. Además, y después de China, es el país que tiene un mayor parque de transporte público eléctrico, pero no porque seamos mejores que otras naciones, sino porque se tomó una decisión de hacer un diseño de contratos de buses eléctricos que son más económicos, más fáciles de operar, silenciosos y con mucho menor impacto ambiental. Gracias a la confianza que existe sobre Chile se hizo una apuesta que ha sido exitosa.

—Cuando hace varios años se inició la incorporación de energías limpias al sistema de generación no sólo se pensó, sino que se dijo, que tendría beneficios ambientales y también en los costos para los usuarios. Pero esa no es la realidad actual.

—Es cierto, pero hay que tomar en cuenta que las inversiones toman su tiempo en madurar. A ello se suma el hecho de que ya existían contratos de largo plazo orientados a dar estabilidad al suministro, que lamentablemente están asociados al precio del dólar, de los combustibles y a la inflación. Y ahí quieren ser super claro: a lo mejor algunos creyeron fantosamente que las energías renovables iban a tener un efecto inmediato, pero si no fuera por ellas, las tarifas seguirían subiendo en el tiempo. Y lo que se pretende ahora es lograr pagar la deuda existente y que las tarifas no continúen elevándose en los próximos años, porque van a ser cada vez menos dependientes de los movimientos internacionales.

—Al margen de ello hay un tema pendiente en materia de transmisión y distribución. Varios analistas estiman que se ha avanzado bastante en la generación, pero no en esos otros dos componentes que también forman parte de la base tarifaria.

—Eso es efectivo. En generación las

tecnologías han cambiado radicalmente y en distribución también ha habido una modernización, pero no se ha visto porque seguimos anclados en el pasado. El caso de la transmisión es diferente, porque sigue siendo la misma de siempre: postes con cables que nadie quiere. Y ahí hay un problema adicional, porque si antes en Chile esos postes recorrían unas zonas alejadas hoy ya no es así, porque las energías renovables vienen de todos lados; de la costa de Coquimbo, del sol de Atacama, en fin. El tema es cómo conciliamos el círculo y ahí tenemos que resolver una situación socioambiental. Tenemos que llegar a un acuerdo: si queremos más energía eléctrica en las ciudades se deben construir más líneas, independientemente de que haya generadoras que estén más cerca de las ciudades y tengamos más paneles solares. Se acaba de iniciar un proyecto que viene desde Mejillones hasta cerca de Santiago, que se llama Kimal-Lo Aguirre. Son 1.500 kilómetros de una línea nueva que se va a construir con una potencia enorme, porque tiene una tecnología nueva, pero pasa por 30 comunas. Y hay otra discusión que está al margen, que es que hoy las grandes inversiones en transmisión las pagan íntegramente los clientes a través de las cuentas. La pregunta pendiente es si las generadoras que se instalan lejos de las ciudades debieran llevarse una proporción del costo de la transmisión, como ocurría antes en Chile.

—Y eso por qué cambió?

—Porque se tomó una decisión política poco racional pensando en que como íbamos a contar con energías renovables iban a bajar los costos, pero eso no ha ocurrido y eso ha creado un des incentivo para instalar centrales más cerca de las ciudades, principalmente de Santiago. Esa es una discusión abierta, pero no a la escala de lo que ocurre en materia de distribución.

"Priorizar la calidad de servicio"

—¿Cuál es el mayor problema en distribución?

—La gran reforma pendiente en Chile es la distribución al usuario final, porque ahí sí ha existido una importante modernización a través de las tecnologías digitales. Hoy día en casi todas las casas hay un medidor, pero que funciona de manera tal que si la luz se corta nadie se entera. Algo que no ocurre en Uruguay, que no es un país más rico que nosotros, pero donde el ciento por ciento de sus redes de distribución son digitales. Sin embargo, eso implica un costo que actualmente no es bajo. Si nosotros queremos tener un estándar de servicio como el europeo, donde la luz no se corte, eso generalmente ocurre cuando los cables van bajo tierra. También tenemos que potenciar lo que se conoce como "servicios energéticos distribuidos", que necesitan de instalaciones especiales para cargar autos eléctricos cuando llegas a tu casa. Otro aspecto es que la energía se pueda guardar. Sin esos componentes no vamos a tener la posibilidad de que la gente se suba al siglo XXI

en términos energéticos.

—¿Por qué no se han hecho los cambios en el área de distribución?

—Yo creo que nadie le ha puesto la atención necesaria. En el 2018, al inicio del segundo gobierno de Sebastián Piñera, se estaban empezando a instalar medidores inteligentes y finalmente hubo un problema en cómo se diseñó la implementación y la gente se opuso, porque además había un cargo en la tarifa y todo se truncó. Después hubo otro intento de hacer una reforma a la distribución, que tenía como componente un cambio en la calidad de servicio, es decir que hubiera más medidores inteligentes y paneles solares y, por otra parte, la portabilidad, es decir, que se pudiera elegir a quien se le contrata el servicio; tal como ocurre con la telefonía. Lamentablemente, por una razón que yo no comparto, se partió por la portabilidad.

—¿Qué habría hecho usted?

—Lo que se debió haber hecho es priorizar la calidad de servicio, lo que es un poco más caro, pero si queremos que la luz se corte menos es lo que necesitamos. Esto que estoy planteando se debió haber hecho hace 10 o 15 años, porque las primeras tecnologías digitales existen hace tiempo. Todo eso implica mejorar la distribución para tener sistemas que den una mejor calidad de servicio y que sean resilientes al cambio climático que va a ir empeorando la situación. Pero eso cuesta plata y nadie en el sistema político quiere hacer una reforma para que algo cueste más caro.

—Bueno, también está el hecho de que hay otras reformas que se consideran más urgentes, como la de pensiones, que no han logrado avances porque no hay acuerdo político.

—Sí, pero a diferencia de la reforma de pensiones, creo que un cambio en la distribución tendría más consenso. La forma en que se paga a las distribuidoras está igual desde 1981. Necesitamos urgente redactar nuevas leyes y llevarlas al Congreso. Sería notable si el ministro de Energía lograra un acuerdo, de la mano con los subsidios para ayudar a la gente más vulnerable con las alzas de la luz, para impulsar cambios que mejoren el servicio.

—El problema es que estamos en un ciclo electoral, donde todos los sectores están poniendo sus fichas en prometer más seguridad, que es el principal problema que aqueja a la población, y un aumento del crecimiento. No se ven otras propuestas.

—Es verdad. Pero a veces los gobiernos, cuando están llegando al fin de su ciclo, logran ciertos acuerdos que antes parecían más difíciles. Al final la electrificación tiene que incorporarse a la sociedad, porque es una necesidad y además genera inversión, de la mano de un beneficio social y ambiental increíble. Si hoy las empresas distribuidoras, que son reguladas, pudieran dar un mejor servicio, probablemente la gente estaría dispuesta a pagar por ello y los que no lo puedan hacer deberían recibir un subsidio.



Hoy las grandes inversiones en transmisión las pagan íntegramente los clientes a través de las cuentas".



La pregunta pendiente es si las generadoras que se instalan lejos de las ciudades debieran llevarse una proporción del costo de la transmisión".